

"Ciudades por los bosques": una campaña para detener las talas ilegales



Los ayuntamientos son las administraciones públicas españolas que más dinero dedican a las compras de madera y papel, productos renovables cuyo uso es preferible frente al de otros más contaminantes como plásticos, metales o cementos pero que, con demasiada frecuencia, proceden de las talas ilegales e insostenibles que están destruyendo los últimos bosques vírgenes del planeta y la biodiversidad forestal mundial.

Aunque comúnmente es un problema que se identifica con las regiones tropicales, la tala ilegal y su comercio asociado afecta también a países desarrollados y economías en transición. A su vez, no se trata de un problema meramente ecológico, también suponen un importante estímulo a la corrupción, a la evasión fiscal y a la competencia desleal sobre la parte del mercado que sí está comprometida con la gestión forestal sostenible. Además, en varios países, como Birmania o Costa de Marfil, es una actividad cómplice de la extorsión y los conflictos bélicos.

La magnitud del problema es tan importante que organismos internacionales como el Banco Mundial, el G8 y la propia Unión Europea se han pronunciado al respecto para hacer notar que es prioritario detener la explotación forestal ilegal si queremos conservar los bosques que nos quedan y que, sin el compromiso de los gobiernos y los mercados europeos, es imposible atajar el problema. Entre tanto, las previsiones de la FAO auguran que, hacia la segunda mitad de siglo, el consumo actual de madera podría duplicarse.

Las Administraciones públicas españolas gastan más de 2.100 millones de euros al año en productos de madera y papel, el 18% del mercado. Un gasto que equivale al doble del presupuesto sanitario de un país subdesarrollado como Bolivia y que es un 20% mayor que la ayuda española oficial al desarrollo, y que pone en evidencia el peso que tienen nuestros organismos públicos como consumidores directos de productos forestales y, por tanto, como impulsores de una gestión forestal más responsable.

Sin embargo, esta responsabilidad no está asumida. Mientras que el 15,8% de las importaciones españolas de

madera y productos derivados proceden directamente de países donde las talas ilegales son prácticas habituales (véase gráfico 1), el 99,7% de los ayuntamientos españoles carecen de instrumentos de compra responsable con los que discriminar la madera que tiene ese origen. Es decir, nuestros gobiernos locales destinan anualmente cientos de millones de euros a la compra de productos que proceden de la destrucción de los bosques y de los medios de vida de millones de personas que viven en ellos sin hacer nada por evitarlo.

Ante esta situación, WWF/Adena realiza un llamamiento a las administraciones públicas para que dejen de ser parte del problema y se conviertan en el motor de la solución, y les anima a que desarrollen políticas de compra responsable de productos forestales donde se rechace el uso de los productos de origen ilegal o desconocido y se dé prioridad a los productos certificados por sistemas creíbles como el del FSC (Consejo de Administración Forestal), único sistema de certificación basado en el equilibrio de intereses sociales, ambientales y económicos, tanto a escala global como local, y cimentado sobre los principios de participación social, verificación independiente y transparencia.

Para facilitar a los ayuntamientos este proceso, WWF/Adena ha elaborado la *Guía de compras verdes de madera para las Administraciones locales*, y ha creado el observatorio permanente "Ciudades por los Bosques" donde se evalúa el compromiso como consumidores responsables de los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes.

Hasta el momento los Ayuntamientos de Barcelona, el Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat están aplicando ya políticas de compra pública responsable de productos forestales y cerca de una veintena han mostrado su compromiso mediante declaración institucional. Un buen comienzo que urge extender, por lo que WWF/Adena anima a todas las administraciones públicas, así como al sector privado, para que desarrollen este tipo de políticas y contribuyan a frenar la destrucción de los bosques. 

Más información

- En www.wwf.es y en el documento *Guía de compras verdes de madera para las Administraciones locales* (enlace directo: www.wwf.es/bosques_comercio_consumo_responsable_pforestales.php)
- Para conocer el comportamiento de su ayuntamiento visite el Observatorio "Ciudades por los Bosques" en la página web www.wwf.es.

Gráfico 1 Porcentaje de talas ilegales en los países de los que España importa productos forestales.

EUROPA ¹		ASIA ³	
País	% talas ilegales	País	% talas ilegales
Rusia ²	27% Noroeste	China	20%
	50% Lejano Este Ruso	Indonesia ⁴	73%
	100% Castaño del Cáucaso	Corea del Sur	30%
Estonia	50%	Taiwan	45%
Letonia	10-20%	Filipinas	46%
		Vietnam	22-39%
AFRICA ⁵		AMÉRICA ⁷	
País	% talas ilegales	País	% talas ilegales
Camerún	50%	Brasil	Estado de Pará 66%
Guinea Ecuatorial	50%		Amazonas 80%
Gabón	70%	Perú	80%
Ghana	60%	Ecuador	70%
Liberia ⁶	80%		

- (1) WWF/Adena está recopilando datos de: Lituania, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Ucrania, Polonia y Hungría donde se estima que los porcentajes de talas ilegales también son elevados.
- (2) La mitad de las exportaciones rusas se destinan a Finlandia, Suecia, Reino Unido, Alemania e Italia.
- (3) No existe información adecuada sobre Birmania, Papua Nueva Guinea y Tailandia, pero se estima que los porcentajes de talas ilegales son elevados.
- (4) Una gran parte de la madera importada desde Malasia procede de Indonesia.
- (5) No existe información adecuada sobre la República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Sierra Leona y Guinea.
- (6) Existe un embargo económico del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) que restringe las exportaciones de madera de este país.
- (7) No existe información adecuada sobre Bolivia y Colombia.

Félix Romero Cañizares
Programa Forestal WWF/Adena